

# La corrupción alimenta la inequidad y los conflictos sociales

por Prensa S. Marco Aníbal Avirama

Tamaño fuente

Imprimir

Share 0

Twitter

Califica este artículo

(1 Voto)



Senador Marco Aníbal Avirama

Prensa Senado

*"Proponemos que la pedagogía para la paz que se hace o debe hacer en todos los espacios y territorios de la nación, incluya como punto central la lucha contra la corrupción": senador Marco Aníbal Avirama.*

**Bogotá D.C., mayo 5 de 2016.-** Cada día este país despierta con un nuevo episodio de corrupción del cual nos olvidamos al día siguiente y sobre los cuales la justicia no opera con eficacia, o cuando opera,

lo hace a paso de caracol.

No termina de sorprendernos la capacidad inagotable de funcionarios públicos y agentes privados para seguir sirviéndose del plato de la corrupción a todos los niveles: desde lo municipal, pasando por las gobernaciones y las entidades centrales, se ha convertido en el pan de cada día, terminando por recibir el sello de la aprobación social, con justificaciones diversas y perversas.

Las prácticas corruptas comprenden no solo la expoliación de los bienes y dineros públicos, sino también la omisión de los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones y deberes. Estas prácticas marcan el funcionamiento de nuestra institucionalidad y favorecen poderosos intereses privados, ante la indiferencia y pasividad de la sociedad en general y la mayoría de las veces, con la negligencia de los entes de investigación y control.

No nos sorprende entonces que los colombianos desconfíen de sus instituciones como lo revelan los resultados del Barómetro de las Américas (2015), al mostrar que en Colombia la percepción de la corrupción alcanzó 80 puntos en una escala de 0 a 100, lo que nos sitúa en el vergonzoso segundo país con mayor índice de percepción de corrupción del continente, al tiempo que muestra el porcentaje más alto de la región, en cuanto el 60% de los colombianos cree que la corrupción es general en los funcionarios públicos.

La corrupción es violencia contra los ciudadanos y sus derechos. La moralidad pública es un derecho colectivo que debe garantizar el uso y disfrute de otros derechos ciudadanos, tales como la integridad del patrimonio público, el derecho fundamental a la salud, el acceso a la tierra, el derecho a la alimentación de los niños, a una justicia pronta e independiente, y otros muchos que se vulneran a lo largo y ancho del país.

Esta realidad nos muestra la estrecha relación existente entre corrupción, inequidad en la distribución de los recursos públicos y pobreza. Y mal podemos hablar de hacer el tránsito hacia un país reconciliado y en paz si no atacamos la podredumbre de la corrupción de manera decidida, y antes de que empecemos a hablar de los recursos del posconflicto, a los cuales habrá que proveerlos de todos los controles y salvaguardas posibles para que no se conviertan en coto de cacería de los agentes públicos y privados que ya les han puesto el ojo. Aprendamos de las malas experiencias de los países centroamericanos en el manejo de los recursos del posconflicto. A fin de cuentas el poder político, económico y social,

permeado por el clientelismo y las costumbres corruptas en las regiones y en el nivel central, siguen intactos en este país.

Un informe publicado por la Sociedad Colombiana de Economistas sostiene que la corrupción le ha costado al país, desde 1991 hasta el 2010, alrededor de 190 billones de pesos, lo que equivale al 4% del PIB del país durante esos 19 años. Eso sin contar el osado incremento de los carteles de funcionarios corruptos en los años que siguen a este estudio. Otros estudiosos afirman que el conflicto armado, en 10 años, le ha costado \$207 billones al país. Las cifras están cerca. Finalizar el conflicto armado y atacar con eficacia la corrupción nos colocaría en mejores condiciones para responder a los requerimientos en recursos del pos-acuerdo.

Por ello proponemos que la pedagogía para la paz que se hace o debe hacer en todos los espacios y territorios de la nación, incluya como punto central la lucha contra la corrupción, que debilita y corroe las instituciones y sustituye valores éticos y de convivencia pacífica, para que los ciudadanos podamos identificar las conductas delictivas, ejercer control sobre los funcionarios y acceder a la información que nos permita hacer monitoreo continuo a la ejecución de los recursos públicos.

No desconozcamos que el sentido común de los colombianos ya ha identificado como talanqueras para avanzar en bienestar social y prosperidad económica, y con el mismo peso, el conflicto armado interno y la corrupción. Superado el primero, nos queda ocuparnos, desde todos los poderes públicos y desde la ciudadanía, de darle mate a la corrupción en todas sus manifestaciones. Políticas claras de lucha contra la corrupción deberían formar parte de las garantías de no repetición a que tenemos derecho los colombianos que hemos sido víctimas del conflicto armado interno.

Leído **254** veces | [Te gusta? Envíalo a Twitter](#)

---

**Relacionado con:** [Senadores / Noticias](#)

---

**Compártelo en redes sociales**

---

[Ir arriba](#)